



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20192400057775

Fecha: 12/12/2019

CT-F-023 V.3

Página 1 de 22

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20192400057775 DEL 12/12/2019

EXPEDIENTE: 2018240350600056E

**POR LA CUAL SE DECIDE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA
ADELANTADA CONTRA ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.**

**LA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS**

En ejercicio de las funciones conferidas por el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, el Decreto 990 de 2002, la Ley 1437 de 2011 y la Resolución SSPD No. 201910000447456 del 22 de octubre de 2019, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios decide la actuación administrativa sancionatoria adelantada contra la **ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.**, previa exposición de los siguientes:

I. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. Mediante el memorando SSPD No. 20182200097563 del 7 de septiembre de 2018¹, la Dirección Técnica de Gestión de Energía (en adelante "**DTGE**") de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante "**SSPD**"), remitió a la Dirección de Investigaciones para Energía y Gas Combustible (en adelante "**DIEG**"), un Informe Técnico de Gestión recomendando que, de existir mérito, se iniciara una investigación administrativa sancionatoria contra la **ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.**, identificada con el NIT 892.002.210-6 (en adelante "**EMSA**" o la "**INVESTIGADA**"), por el presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 142 de 1994².

1.2. A través del acto administrativo SSPD No. 20192400638121 del 31 de julio de 2019³, la **DIEG** abrió investigación y formuló pliego de cargos a **EMSA**. Dicho acto fue notificado por correo electrónico certificado el 2 de agosto de 2019⁴.

1.3. Por medio de las comunicaciones No. 20195290951862 del 29 de agosto de 2019⁵ y No. 20195290969962 del 2 de septiembre de 2019⁶, **EMSA** presentó sus descargos.

1.4. Mediante el acto administrativo SSPD No. 20192400999051 del 18 de noviembre de 2019⁷, la **DIEG** decidió sobre el decreto y práctica de pruebas, y corrió traslado a **EMSA** para presentar sus alegatos.

1.5. Habiéndose corrido traslado para la presentación de alegatos⁸, la **DIEG** verificó que la **INVESTIGADA** no los presentó.

¹ Cfr. Folios 1 a 12 de la carpeta única del expediente. Entiéndase que en el presente acto administrativo cuando se hace referencia al Expediente, este corresponde al identificado con el No. 2018240350600056E.

² "Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones".

³ Cfr. Folios 19 a 23 de la carpeta única del expediente.

⁴ Cfr. Folios 24 a 42 de la carpeta única del expediente.

⁵ Cfr. Folios 43 a 48 de la carpeta única del expediente.

⁶ Cfr. Folios 49 a 53 de la carpeta única del expediente.

⁷ Cfr. Folios 54 a 56 de la carpeta única del expediente.

⁸ Al respecto, el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo Sancionatorios, estableció: "[v]encido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para que presente los alegatos respectivos".

II. IMPUTACIÓN

Conforme lo establecido en el acto administrativo No. 20192400638121 del 31 de julio de 2019⁹, la **DIEG** inició investigación administrativa e imputó los siguientes cargos a la **INVESTIGADA**:

“CARGO PRIMERO: ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. presuntamente incurrió en lo dispuesto en el numeral 11.2.4.1 del capítulo 11 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008, y en consecuencia vulneró lo dispuesto en los artículos 136 de la Ley 142 de 1994 y 6 de la Ley 143 de 1994, ya que los límites de su Índice Trimestral Agrupado de la Discontinuidad de los niveles de tensión 1, 2 y 3, presuntamente superaron el promedio histórico y por encima de la Banda de Indiferencia establecida en la Resolución CREG 020 de 2011, para el cuarto trimestre de 2016”.

CARGO SEGUNDO: ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. presuntamente vulneró lo dispuesto en los numerales 11.2.4.1 y 11.2.4.3 del capítulo 11 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008, y en consecuencia vulneró lo dispuesto en los artículos 136 de la Ley 142 de 1994 y 6 de la Ley 143 de 1994, al tener 3.383 usuarios catalogados como “Peor Servidos” cuya compensación estimada superó el costo del servicio de distribución facturado para los meses de medición de enero a abril de 2017”¹⁰.

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y la imputación formulada, procede la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante el “Despacho”); a analizar los cargos endilgados a **EMSA**, explicando previamente su competencia para conocer de la presente investigación.

3.1 COMPETENCIA DEL DESPACHO PARA CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

El artículo 2 de la Constitución Política constituye el primer fundamento constitucional implícito de la potestad sancionatoria de la administración pública, al contemplar como fines esenciales del Estado, entre otros, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Ello implica que la administración debe propender por el mantenimiento de las condiciones que permitan el disfrute de los derechos de las personas, para lo cual deberá utilizar, si es del caso, las facultades sancionatorias inherentes al ejercicio del poder público¹¹.

El inciso 2 del artículo 365 constitucional señala que los servicios públicos estarán sometidos al régimen que fije la Ley. En cumplimiento de este mandato, se expidió la Ley 142 de 1994, correspondiéndole a la **SSPD** las funciones de, entre otras, vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que están sujetos quienes presten servicios públicos domiciliarios, en los siguientes términos:

“Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad”¹² (Resaltado del Despacho).

Ahora bien, conforme lo previsto en el artículo 370 de la Constitución Política de Colombia, corresponde al Presidente de la República fijar las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios. Así, por medio de la **SSPD** se ejercerán las funciones de inspección, vigilancia y control sobre las empresas que los prestan en los términos del artículo 79¹³ de la Ley 142 de 1994; y las sanciones administrativas a

⁹ Cfr. Folios 19 a 23 de la carpeta única del expediente.

¹⁰ Cfr. Folio 23 de la carpeta única del expediente.

¹¹ Corte Constitucional, Sentencia SU - 1010 de 2008, Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. “(...) el ejercicio de la función pública encomendada a la Administración implica que, si ésta se encuentra facultada para imponer un mandato o regular una conducta en servicio del interés público, también debe estar facultada para lograr la garantía del orden mediante la imposición de sanciones, frente al cumplimiento de tales mandatos”.

Véase también Corte Constitucional, Sentencia C - 595 de 2010.

¹² Numeral 1 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994.

¹³ El numeral 1 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, estableció como función de la **SSPD**, la siguiente: “(...) 79.1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad (...)”. (Subrayado fuera de texto).

imponerse se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 81 de la precitada Ley 142 de 1994.

Respecto a las facultades especiales de inspección, vigilancia y control que ostenta la SSPD, el Consejo de Estado ha indicado:

“(...) el legislador le otorgó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios facultades especiales de vigilancia y control, además de plenos poderes sancionatorios por la violación o desconocimiento del ordenamiento jurídico en materia de servicios públicos, todo lo anterior en el marco de actuación de lo dispuesto para el ejercicio y ejecución de sus competencia y funciones misionales. Cabe resaltar que la potestad sancionatoria implica la existencia de un procedimiento previo que respete el derecho de defensa y contradicción y que como resultado del mismo se llegue a la imposición de medidas en el marco del derecho de “punción” o “castigo””.¹⁴

Es entonces suficientemente claro que, con fundamento en las normas referenciadas, este Despacho es competente para conocer y resolver la presente actuación administrativa.

Cabe resaltar que, por medio de la Resolución No. Resolución SSPD No. 20191000044745 del 22 de octubre de 2019, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios aceptó un impedimento y asignó a su Despacho la competencia para conocer los actos administrativos en cuya fase instructiva o previa haya intervenido Diego Alejandro Ossa Urrea en calidad de Director Técnico de Gestión de Energía y deba intervenir ahora como Superintendente Delegado para Energía y Gas.

En el presente caso, Diego Alejandro Ossa Urrea intervino al suscribir el Informe Técnico de Gestión No. 20182200097563 del 7 de septiembre de 2018, que dio origen a la presente actuación administrativa, razón por la cual el Despacho avocará conocimiento.

3.2. MARCO NORMATIVO APLICABLE EN LA PRESENTE ACTUACIÓN

El artículo 136 de la Ley 142 de 1994¹⁵ estableció que la prestación continua de un servicio de buena calidad es la principal obligación de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, y su incumplimiento injustificado constituye falla en la prestación del servicio.

En concordancia con ello, el artículo 6 de la Ley 143 de 1994 definió los mencionados principios de continuidad y calidad, de la siguiente forma:

“Artículo 6 de Ley 143 de 1994. Las actividades relacionadas con el servicio de electricidad se regirán por principios de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad.

(...)

En virtud del principio de calidad, el servicio prestado debe cumplir los requisitos técnicos que se establezcan para él.

El principio de continuidad implica que el servicio se deberá prestar aun en casos de quiebra, liquidación, intervención, sustitución o terminación de contratos de las empresas responsables del mismo, sin interrupciones diferentes a las programadas por razones técnicas, fuerza mayor, caso fortuito, o por las sanciones impuestas al usuario por el incumplimiento de sus obligaciones (...)
(Subrayado fuera de texto).

Así, de acuerdo con la normatividad citada, la calidad en la prestación del servicio debe obedecer a criterios objetivos desarrollados por la regulación con la finalidad de satisfacer los parámetros de interés general y prestación eficiente. De ahí que el análisis de este caso exija el estudio de los numerales 11.2.4.1 y 11.2.4.3 del capítulo 11 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008, fundamento normativo de la presente actuación administrativa de carácter sancionatorio, los cuales establecen los parámetros que permiten determinar la existencia de una falla en la prestación del servicio en el ejercicio de la actividad de distribución de energía en el Sistema de Distribución Local (en adelante “SDL”). Veamos:

¹⁴ Consejo de Estado, Sentencia No. 25000-23-24-000-2005-01325-01 del 26 de noviembre de 2015.

¹⁵ “Artículo 136 de Ley 142 de 1994. Concepto de falla en la prestación del servicio. La prestación continua de un servicio de buena calidad, es la obligación principal de la empresa en el contrato de servicios públicos. El incumplimiento de la empresa en la prestación continua del servicio se denomina, para los efectos de esta Ley, falla en la prestación del servicio (...).”

“(…) Capítulo 11.

En este Capítulo se establecen las reglas que se deben cumplir en cuanto a la calidad en la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica tanto en los STR como en los SDL. Para el caso de los STR se define el tratamiento aplicable a los Operadores de Red cuando no cumplan las condiciones aquí establecidas, y para el caso de los SDL se define un Esquema de Incentivos aplicable de acuerdo con su gestión de calidad.

(…)”.

Numeral 11.2.4.1 del capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097 de 2008

“(…) Para todos los efectos, se considera que hay incumplimiento en la prestación continua del servicio de distribución en el SDL, en los términos del Artículo 136 de la Ley 142 de 1994, cuando: i) el OR aumente su Índice Trimestral Agrupado de la Discontinuidad con respecto al promedio histórico y por encima de la Banda de Indiferencia ii) el OR tiene usuarios “Peor Servidos” cuya compensación estimada según lo establecido en el numeral 11.2.4.3 sobrepasa el límite establecido en el mismo numeral” (subrayado fuera de texto).

Numeral 11.2.4.3 de la Resolución CREG 097 de 2008

“(…) En ningún caso, el valor mensual a compensar a cada usuario, $VC_{n,t,m}$, podrá ser superior al costo del servicio de distribución facturado al usuario en el respectivo mes (…).”.

Significa lo anterior que el incumplimiento por falla en la prestación continua del servicio al que alude el artículo 136 de la Ley 142 de 1994, se materializa por la inobservancia de los estándares de calidad del servicio en el **SDL**, cuya ocurrencia puede presentarse en los siguientes dos eventos: en primer lugar, por el incumplimiento de los niveles de calidad cuando un determinado operador de red (en adelante **“OR”**) aumenta su *“(…) Índice Trimestral Agrupado de la Discontinuidad con respecto al promedio histórico y por encima de la Banda de indiferencia”* y, en segundo lugar, cuando el **OR** tenga usuarios *“Peor Servidos”* cuya compensación estimada sobrepase el límite establecido en el precitado numeral 11.2.4.3.

Por otra parte, la referenciada norma establece el procedimiento al cual deben ajustarse cada uno de los **OR** en el cálculo de la compensación a la que tenga derecho el usuario que se encuentre en las circunstancias anteriormente descritas, con la anotación de que, en ningún caso, el valor mensual a compensar a cada usuario podrá ser superior al costo del servicio de distribución facturado al usuario en el mes respectivo.

3.3. ANÁLISIS DEL CARGO PRIMERO

La **INVESTIGADA** incumplió lo dispuesto en el numeral 11.2.4.1 del capítulo 11 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008, al haber aumentado su **ITAD** con respecto al promedio histórico y por encima de la banda de indiferencia.

En sustento de lo expresado, la motivación de la decisión que se adoptará con respecto al presente cargo, se desarrollará en el siguiente orden: i) análisis de los incumplimientos reprochados; ii) argumentos de defensa de la **INVESTIGADA**; y iii) valoración de los argumentos de defensa.

3.3.1. Análisis de los incumplimientos reprochados en el cargo primero

El pliego de cargos radicado con el No. SSPD 20192400638121 del 31 de julio de 2019¹⁶, indicó que la conducta cometida por **EMSA** presuntamente constituyó *“Falla en la prestación del servicio establecida en el artículo 136 de la Ley 142 de 1994, al vulnerar el numeral 11.2.4.1 del Capítulo 11 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008”*¹⁷.

En línea con lo anterior, a efectos de explicar la naturaleza del incumplimiento en la prestación continua del servicio derivado del aumento del **ITAD** con respecto al promedio histórico y por encima de la banda de indiferencia, es necesario traer a colación la definición de **ITAD** prevista en el artículo 1 de la Resolución CREG 097 de 2008:

¹⁶ Cfr. Folios 19 a 23 de la carpeta única del expediente.

¹⁷ Cfr. Folio 21 de la carpeta única del expediente.

“Índice Trimestral Agrupado de la Discontinuidad (ITAD). Índice de Discontinuidad que relaciona la cantidad promedio de Energía No Suministrada (ENS) por cada unidad de Energía Suministrada (ES) por un OR durante el trimestre de evaluación”.

Lo anterior, debe leerse en concordancia con lo señalado en el numeral 11.2.4.2 del capítulo 11 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008, según el cual la banda de indiferencia implica una medida de calidad, que al ubicarse dentro de la misma no representa mejoras o desmejoras en la calidad media del servicio:

“11.2.4.2 Banda de Indiferencia para la aplicación del Incentivo

Se establece una Banda de indiferencia dentro de la cual se considera que las variaciones de la Calidad Media dentro de este intervalo no representan mejoras o desmejoras de la Calidad Media como respuesta a la gestión del OR y por lo tanto el Incentivo por Variación Trimestral de la Calidad dentro de este rango, $DDt_{n,m}$ se hará igual a cero” (Subrayado fuera de texto).

En ese sentido, y a partir de lo dispuesto por el numeral 11.2.4.1 del capítulo 11 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008, se establecieron tres conceptos específicos que deben evaluarse en la presente actuación:

- i) La Banda de indiferencia, compuesta por un límite superior y un límite inferior que la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible (en adelante “**CREG**”) ha calculado a partir de la información histórica de los años 2006 y 2007 (IRADk 2006 e IRADk 2007).
- ii) El **IRAD** o promedio histórico, entendido como el indicador de referencia calculado a partir del IRADk 2006 e IRADk 2007.
- iii) El **ITAD** que se configura a partir de la calidad del servicio que se evalúa trimestralmente a cada empresa.

Así, en cuanto a la banda de indiferencia¹⁸, la regulación determinó que su composición está supeditada a la consagración de los límites superiores e inferiores determinados para cada empresa de acuerdo con la información histórica reportada al Sistema Único de Información (en adelante “**SUI**”) durante los años 2006 y 2007. Así pues, con arreglo al numeral 11.2.4.2 de la Resolución CREG 097 de 2008, la banda de indiferencia es una franja constituida con base en las variables IRADk tomadas de cada trimestre de los años 2006 y 2007.

Para la determinación de esta banda, se tuvieron en cuenta los índices de referencia presentados por el prestador y aprobados por la **CREG** mediante un acto administrativo particular, expedido a cada empresa prestadora del servicio de energía.

En ese orden de ideas, para determinar el incumplimiento en la calidad de los **SDL**, según el último inciso del numeral 11.2.4.1, el **ITAD** que se pretenda medir debe superar los respectivos IRADk de los años 2006 y 2007 y el **IRAD** (denominado promedio histórico). Tal medición se hace por medio de la comparación del mismo trimestre del **IRAD**, con el respectivo trimestre del **ITAD**.

En cuanto al promedio histórico, debe precisarse que se encuentra definido en los numerales 11.2.3 y 11.2.3.1 de la Resolución CREG 097 de 2008 como el **IRAD**, el cual es calculado individualmente por la **CREG** para cada uno de los **OR** a partir de la información que cada uno de ellos suministró al **SUI** respecto a las interrupciones de energía durante los años 2006 y 2007. Para determinar dicha variable, debe adelantarse el siguiente procedimiento establecido en el aludido numeral 11.2.3.1, que consiste principalmente en la identificación de:

¹⁸ De acuerdo con el numeral 11.2.4.2 del capítulo 11 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008, “[s]e establece una Banda de Indiferencia dentro de la cual se considera que las variaciones de la Calidad Media dentro de este intervalo no representan mejoras o desmejoras de la Calidad Media como respuesta a la gestión del OR y por lo tanto el Incentivo por Variación Trimestral de la Calidad dentro de este rango, $DDt_{n,m}$, se hará igual a cero. Los valores que determinan los extremos de la Banda de Indiferencia corresponderán a la Calidad Media alcanzada trimestralmente por el OR durante el año 2006 y durante el año 2007, así:

$$IRADK_{n,p,k} = \frac{1}{G} \sum_{q=1}^G IRG_{n,q,p,k}$$

(...)”.

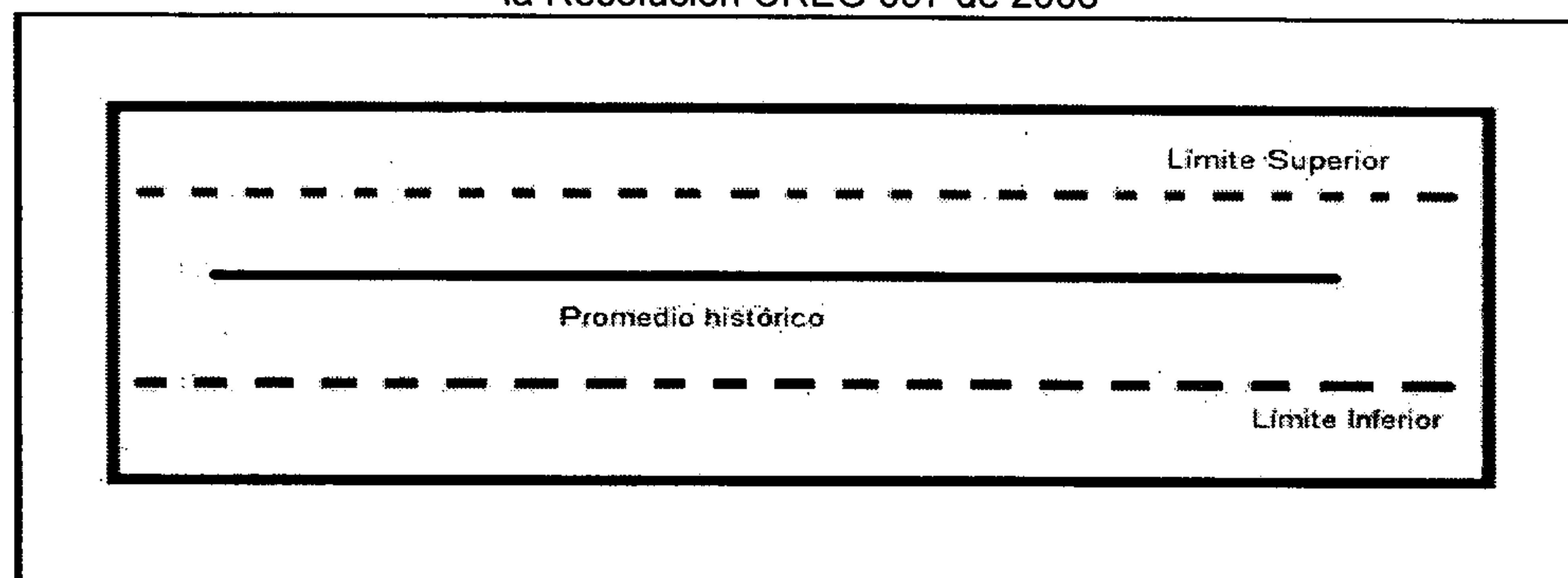
1. Energía promedio consumida por kwh/hora por los usuarios del grupo de calidad q , del Nivel de Tensión n , durante el trimestre p del año k , según información reportada por el comercializador en la base de datos comercial del **SUI**.
2. Nivel de Referencia de las Interrupciones por Transformador.
3. Nivel de Discontinuidad de Referencia por Grupo de Calidad.
4. Ventas de energía asociadas al grupo de calidad q , en el Nivel de Tensión n y para el trimestre p del año k , en kWh, según información reportada en la base de datos comercial del **SUI**.
5. Índice de Referencia de la Discontinuidad por Grupo de Calidad.
6. Índice de Referencia Agrupado de la Discontinuidad, que representa el nivel promedio de Discontinuidad del servicio que percibieron trimestralmente los usuarios del OR conectados al Nivel de Tensión n , durante los años 2006 y 2007, calculado de esta forma:

$$IRAD_{n,p} = \frac{1}{2} \left[\sum_{k=k_1}^{k_2} \left(\frac{1}{G} \sum_{q=1}^G IRG_{n,q,p,k} \right) \right] = \frac{1}{2} \sum_{k=k_1}^{k_2} IRADK_{n,p,k}$$

Así, el promedio histórico de que trata el numeral 11.2.3.1 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008, corresponde a un cálculo dispuesto para promediar los valores reportados en los límites superior e inferior de la Banda de Indiferencia (**IRADK**), tal y como se expone en la siguiente ilustración:

Ilustración No. 1

Exposición gráfica de los conceptos que componen la Banda de Indiferencia consagrada en el Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008



Fuente: Elaboración del Despacho, con base en el numeral 11.2.3.1 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008.

Ya que el promedio histórico es en sí mismo la variable **IRAD** de que habla el numeral 11.2.3.1 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008¹⁹, es posible concluir que los límites de la banda de indiferencia responden al mayor y al menor de los valores de las variables **IRADK₂₀₀₆** e **IRADK₂₀₀₇** calculadas por la **CREG**, con información reportada al **SUI** para los años 2006 y 2007.

Sentado ello, es menester señalar que ya que el **IRAD** de **EMSA** fue calculado y consagrado por la **CREG** en la Resolución CREG 020 de 2011²⁰, tras aplicar la metodología establecida en la Resolución CREG 097 de 2008 y promediar el límite superior con el límite inferior de la banda de indiferencia. Si la gestión de la empresa -reflejada en el indicador de calidad **ITAD**- supera el límite superior, se configura un incumplimiento regulatorio que se materializa cuando el **ITAD** supera el **IRAD** por encima de la banda de indiferencia, en los términos del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008.

Adicionalmente, dado que el promedio histórico depende de los valores que comprenden los límites superior e inferior de la banda de indiferencia, si el **ITAD** de **EMSA** se ubicara por encima del límite superior en comento, necesariamente superará el promedio histórico,

¹⁹ Cuya consagración obedeció a los datos reportados por la empresa para los años 2006 y 2007.

²⁰ "Por la cual se establecen los Índices de Referencia de la Discontinuidad de la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P."

cumpléndose así las dos (2) condiciones establecidas por el regulador para la materialización de la falla.

Ahora bien, de acuerdo con lo señalado en el numeral 11.2.6.2 de la Resolución CREG 097 de 2008, la información para el cálculo del **ITAD** se realiza con base en las interrupciones de transformadores reportada mensualmente al **SUI**, sin perjuicio de los procedimientos operativos para la validación de la información en las fuentes utilizadas por el **OR**, como es el caso del Sistema de Gestión de Distribución (en adelante “**SGD**”):

“11.2.6.2 Información para el Cálculo del ITAD

El OR calculará el ITAD con base en la información de duración de las interrupciones de transformadores reportada mensualmente al SUI. Sin embargo, la CREG establecerá los procedimientos operativos necesarios para la validación de la información de las interrupciones registradas en los elementos teledados y demás fuentes de registro utilizadas por el OR en su sistema de Gestión de la Distribución”.

También es relevante señalar que conforme el numeral 11.2.1.2 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008, para el cálculo de los índices de discontinuidad -como lo es el caso del **ITAD**-, no se tendrán en cuenta las interrupciones clasificadas así:

“11.2.1.2 Exclusión de Interrupciones

Para el cálculo de los Índices de Discontinuidad y demás componentes que conforman las fórmulas que se establecen más adelante, no se tendrán en cuenta las siguientes interrupciones:

- a) Las clasificadas como Causadas por Terceros en el literal c) del numeral 11.2.1.1 de este Capítulo.*
- b) Las debidas a catástrofes naturales, tales como Erosión (Volcánica, Fluvial o Glacial), Terremotos, Maremotos, Huracanes, Ciclones y/o Tomados.*
- c) Las debidas a actos de terrorismo.*
- d) Las debidas a Acuerdos de Calidad en las Zonas Especiales.*
- e) Suspensiones o cortes del servicio por incumplimiento del contrato de servicios públicos por parte del usuario.*
- f) Suspensiones o cortes del servicio por programas de limitación del suministro al comercializador.*
- g) Las suspensiones del servicio asociadas a proyectos de expansión de los que trata el numeral 4.3 de este Anexo.*
- h) Trabajos en Subestaciones que respondan a un Programa Anual de Reposición y/o Remodelación para Exclusiones y cuyos cortes hayan sido informados a los usuarios afectados con una anticipación no mayor a ocho días y no menor a 48 horas, mediante publicación en un medio de comunicación masivo disponible en la región o área afectada. Cuando los eventos programados afecten cargas industriales, el tiempo de notificación no podrá ser inferior a 72 horas y requerirá una comunicación formal por parte de la empresa.*

(...)

- i) Interrupciones originadas en exigencias de traslados y adecuaciones de la infraestructura eléctrica por parte de entidades Distritales, Departamentales, Organismos Viales o por demás autoridades, o por proyectos de desarrollo en concordancia con Planes de Ordenamiento Territorial.*

Para cada una de las interrupciones excluidas, los OR deberán mantener la documentación y pruebas que sirvan de soporte para la exclusión, así como de los avisos realizados para informar al usuario sobre las interrupciones que causarán los trabajos de remodelación y/o reposición de subestaciones, la cual será verificada por la auditoría de la cual trata el numeral 11.2.5.4.2.

(...)”

A partir de lo expuesto, se concluye que la regulación considera que es un incumplimiento a la obligación de prestar el servicio de distribución de manera continua, y en consecuencia una falla en la prestación del servicio, el hecho de que el **OR** “Aumente su Índice Trimestral Agrupado de la Discontinuidad con respecto al promedio histórico y por encima de la Banda de Indiferencia”, como en efecto se dio en el presente caso.

3.3.2. Argumentos de defensa de la INVESTIGADA

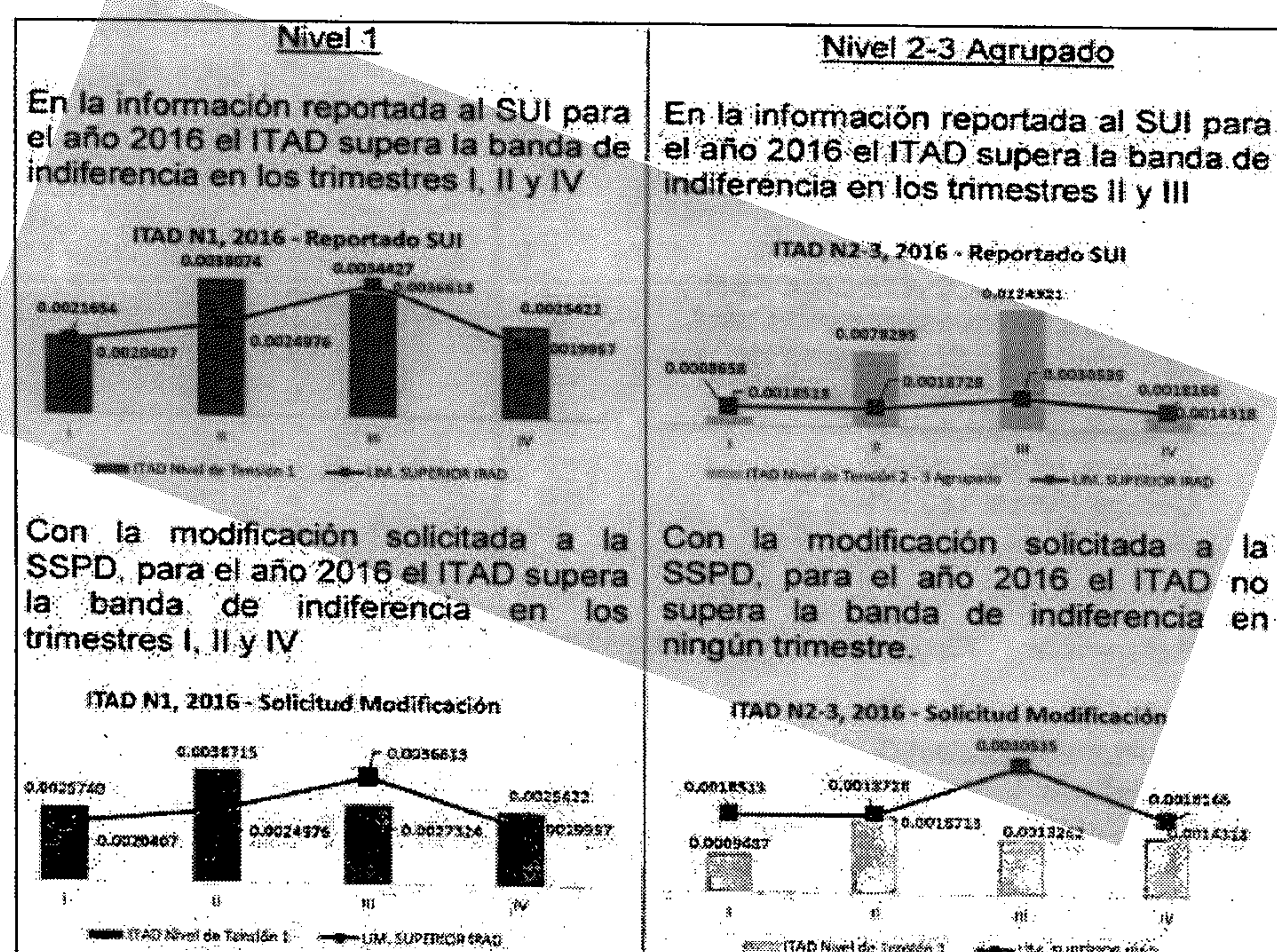
Mediante las comunicaciones SSPD No. 20195290951862 del 29 de agosto de 2019²¹ y No. 20195290969962 del 2 de septiembre de 2019²², la **INVESTIGADA** presentó sus argumentos de defensa contra el Pliego de Cargos No. 20192400638121 del 31 de julio de 2019²³.

A continuación, se exponen los argumentos de defensa presentados por la **INVESTIGADA**:

i) Errores en la información cargada al SUI

EMSA señaló que la información con la cual se realizó el cálculo de sus indicadores de calidad era errónea, razón por la cual solicitó su reversión a la **SSPD**; en los siguientes términos:

"(...) mediante comunicación GD-PE-20192000238381 de fecha 05 de agosto de 2019, la cual fue presentada ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con radicado SSPD - 2019200238381, se solicitó modificación de la información de los formatos 7, 9 y 10, información del ITAD del año 2016.



De acuerdo con la solicitud realizada a la SSPD para la modificación de los indicadores, debe tenerse en cuenta:

- En el Nivel 1 el índice Trimestral Agrupado de la Discontinuidad (ITAD) supera la Banda de Indiferencia establecida para EMSA en los trimestres I, II y IV.
- En el Nivel 2-3 Agrupado el Índice Trimestral Agrupado de la Discontinuidad (ITAD) no supera la Banda de Indiferencia establecida para EMSA en ningún trimestre²⁴.

ii) Eventos de fuerza mayor

*"En el año 2016, se presentaron a lo largo del año eventos en el SDL que afectaron los indicadores de calidad del servicio. Se tuvieron mantenimientos en nivel 4 con apertura de línea tanto en la subestación reforma como en la línea que va desde Puerto López hasta Puerto Gaitán, Ocoa Reforma y Granada Ocoa, se remodelaron algunos de los circuitos entre ellos Serranía, Barcelona, Guayuriba y Rural que fueron de los más extensos y donde se requirió de suspensiones de los circuitos, previamente informados y socializados, este año se requirió de varias consignas nacionales las cuales se sirvieron para mantenimientos preventivos y correctivos en las subestaciones"*²⁵.

(...)

²¹ Cfr. Folios 43 a 48 de la carpeta única del expediente.

²² Cfr. Folios 49 a 53 de la carpeta única del expediente.

²³ Cfr. Folios 19 a 23 de la carpeta única del expediente.

²⁴ Cfr. Folio 44 de la carpeta única del expediente.

²⁵ Cfr. Folio 45 de la carpeta única del expediente.

“De igual manera, se deben resaltar las actividades y proyectos realizados por EMSA que inciden directamente en el mejoramiento de la calidad del servicio y que se han visto reflejados en los años 2017, 2018 y en lo corrido del año 2019”²⁶.

(...)

“Se evidencia que a partir del año 2017 los Indicadores de Calidad del servicio ITAD en los niveles de tensión 1 y 2-3 agregado han mejorado de manera significativa, y debe resaltarse que labores como el mantenimiento y remodelación de redes que en un momento determinado pueden afectar los indicadores de calidad, estas labores a futuro se vieron reflejadas en la disminución de los mismos mejorando la calidad del servicio”²⁷.

iii) Situación particular de los niveles de tensión 2 y 3

EMSA señaló que para el cuarto trimestre de 2016, cumplió con sus indicadores de calidad en los niveles de tensión 2 y 3, afirmando categóricamente que “(...) en el Nivel 2-3 Agrupado el índice Trimestral Agrupado de la Discontinuidad (ITAD) no supera la Banda de Indiferencia establecida para EMSA en ningún trimestre”²⁸.

3.3.3. Valoración de los argumentos de defensa de EMSA

i) Errores en la información cargada al SUI

En su línea argumentativa, **EMSA** señaló la información con la cual se realizó el cálculo del indicador **ITAD** era errónea y en ese sentido solicitó a la **SSPD** modificar la información de los formatos 7, 9 y 10, respecto al **ITAD** del año 2016²⁹.

Al respecto, corresponde a este Despacho desestimar los argumentos de defensa de la **INVESTIGADA**, pues aunque en efecto la empresa solicitó la reversión de la información cargada en los formatos 7, 9 y 10 del **SUI** para el año 2016, obra en el expediente el oficio SSPD No. 20192200971271 del 13 de noviembre de 2019³⁰, por medio del cual la Superintendencia Delegada para Energía y Gas rechazó dicha solicitud. Veamos:

²⁶ Cfr. Folios 49 revés a 50 de la carpeta única del expediente.

²⁷ Cfr. Folio 45 de la carpeta única del expediente.

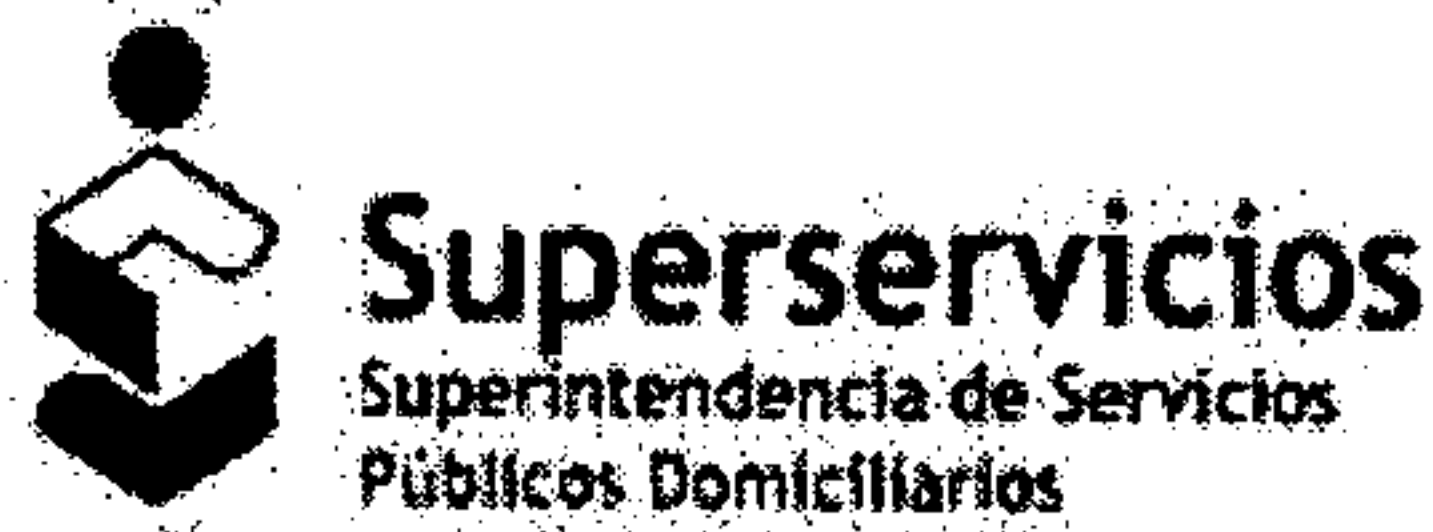
²⁸ Cfr. Folio 45 de la carpeta única del expediente.

²⁹ Cfr. Folio 49 de la carpeta única del expediente.

³⁰ Cfr. Folio 56 de la carpeta única del expediente.

Ilustración No. 2

Exposición de motivos por los cuales se rechazó la solicitud de reversión elevada por EMSA mediante la comunicación SSPD No. 20195290877662 del 15 de agosto de 2019



GD-F-007 V.12

Bogotá, D.C.

Página 1 de 2

Señor
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GUZMAN
 Gerente General
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. – ID 600
 Calle 37 A No. 45-53 Barrio Barzal
 E-mail: gerencia@emsa-esp.com.co
 Villavicencio, (Meta)

ASUNTO: Radicado SSPD No. 20195290877662 del 15 de agosto de 2019

Respetado Señor Rodríguez:

En atención al radicado del asunto, mediante el cual la **ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.** solicita se autorice la reversión voluntaria definida en el artículo segundo de la Resolución SSPD No. 20171000204125 de 18 de octubre de 2017, relacionada con la información certificada en la plataforma SUI en los formularios 7, 9 y 10 certificado para algunos de los periodos de los años 2016 y 2017, indicando el siguiente motivo:

"(...) Se requiere hacer modificaciones debido a que, una vez verificada la información se encontró que los valores de energías reportados deben ser actualizados (...)"

Al respecto éste Despacho le informa que el documento remitido cumple de lleno con los requisitos y los términos establecidos en los artículos tercero y cuarto de la mencionada Resolución. De igual manera, la Dirección Técnica de Gestión de Energía Eléctrica a través de la visita administrativa realizada de 22 al 25 de octubre, verificó la solicitud e información del prestador con el fin de verificar la calidad de la información modificada y sus posibles incidencias en los procesos de vigilancia, inspección y control de la entidad.

Conforme a lo anterior, la Superintendencia Delegada de Energía y Gas Combustible **RECHAZA** la solicitud de reversión, por lo siguientes motivos:

- En el archivo de Excel donde la empresa calcula el valor del ITAD hay algunos usuarios de nivel de tensión 3 los cuales tienen un nivel de tensión distinto al registrado en los archivos del FTP para los trimestres II y III del 2016, por lo cual se sugirió a la empresa



Sede principal: Carrera 18 nro. 84-35, Bogotá D.C. Código postal: 110221
 PBX (1) 691 3005, Fax (1) 691 3058 - sspd@superservicios.gov.co
 Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá, Línea gratuita nacional 01 8000 91 03-05
 NIT: 800.250.984.6
www.superservicios.gov.co

20192200971271

Página 2 de 2

que es necesario realizar la verificación nuevamente de la información para estos periodos y solicitar de nuevo la reversión de los formatos.

- En la tabla de EXCEL para el cálculo del ITAD hay usuarios asociados a un transformador genérico con código MAT0101 el cual utiliza EMSA provisionalmente para asociar los usuarios nuevos mientras se vinculan en el DMS al transformador que les presta el servicio
- Se solicitó por parte de EMSA la reversión de los formularios 7,9 para el trimestre I, II y III del 2016, sin embargo, se evidencio que es necesario que se requiera también la reversión del IV trimestre de este formulario dado a que EMSA incluyó en la solicitud inicial la modificación del formulario 10 para los meses de febrero y marzo de 2017.
- El argumento indicado por EMSA de la reversión se fundamenta en la inconsistencia en el reporte del formato 1 debido a que se incluyó el usuario con NIU 363017504 de nivel de tensión 4, teniendo en cuenta lo anterior la SSPD identifico que lo mencionado por EMSA logra justificar la modificación de la información para el ITAD del nivel de tensión 2 y 3; por tal razón se considera necesario que EMSA amplie la motivación de la reversión para el ITAD del nivel de tensión 1

Para cualquier inquietud por favor comuníquese con el Centro Especializado de Servicio y Soporte SUI a través de los siguientes medios: telefónicamente con el número (1) 6913006, opción 2 – 1, línea gratuita nacional 018000 910305, horario de atención de Lunes a Viernes: 7:00 am a 5:00 pm, Sábados 8:00 am a 12:00 m, página web www.sui.gov.co o el correo electrónico sui@superservicios.gov.co.

Atentamente,



DIEGO ALEJANDRO OSSA URREA
Superintendente Delegado para Energía y Gas Combustible (E)

Proyecto, Cristian David Restrepo – Contratista DTGE
Revisó: Diego Alejandro Ossa Urrea – Director Técnico de Gestión de Energía
Expediente No.: 2009220351600016E

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co

Fuente: Oficio SSPD No. 20192200971271 del 13 de noviembre de 2019

Es relevante precisar, que el **SUI** es el sistema de información oficial en el que todos los prestadores de servicios públicos domiciliarios deben reportar información técnica, administrativa, financiera, operativa, comercial, de accidentes de origen eléctrico, entre otras.

En ese orden de ideas, las empresas prestadoras de servicios públicos tienen el deber de reportar oportunamente al **SUI** información consistente y de calidad, al considerarse oficial para que las autoridades como el Ministerio de Minas y Energía (**MME**), la Unidad de Planeación Minero-Energética (**UPME**), la Comisión de Regulación (**CREG**) y la **SSPD** puedan continuar cumpliendo sus funciones de planeación, regulación, vigilancia y control.

Así pues, y ante el carácter oficial de la información reportada por **EMSA**, corresponde a este Despacho tomar como cierta la información cargada al **SUI**, dando trámite a las acciones que de dichos datos puedan desprenderse.

ii) Eventos de fuerza mayor

La **INVESTIGADA** manifestó que se presentaron una serie de hechos externos e imprevisibles eximentes de responsabilidad, los cuales influyeron en la continuidad de la prestación del servicio de energía a su cargo.

Al respecto, este Despacho procede a desarrollar de manera general el alcance de los elementos constitutivos del caso fortuito o fuerza mayor, esto es: (i) imprevisibilidad; (ii) irresistibilidad y (iii) externalidad, para determinar si se ha configurado un caso fortuito o fuerza mayor en el caso bajo estudio.

- Elementos constitutivos de la fuerza mayor o el caso fortuito

a) Imprevisibilidad

El Consejo de Estado ha sostenido que la determinación de la previsibilidad de una circunstancia se realiza haciendo sustracción de la condición subjetiva del deudor y su posible ausencia de diligencia o perspicacia en cuanto a la identificación del riesgo. Si el suceso hubiese podido ser previsto por otra persona, no puede predicarse la condición de imprevisibilidad del suceso, la cual supone un estándar universal de calificación³¹.

Así, *"la imprevisibilidad se presenta cuando el suceso escapa a las previsiones normales, que ante la conducta prudente adoptada por el que alega el caso fortuito, era imposible preverlo"* y debe establecerse que el acontecimiento respectivo fue absolutamente *"extraño, súbito e inesperado; y es una cuestión de hecho que el juzgador debe apreciar concretamente en cada situación, tomando como criterio para el efecto, la normalidad o la frecuencia del acontecimiento, o por el contrario, su rareza y perpetuidad"*³².

En sentencia de unificación del 30 de septiembre de 2014, la Sala Plena del Consejo de Estado precisó que la imprevisibilidad de un evento se predica cuando:

*"(...) no es posible contemplar el hecho con anterioridad a su ocurrencia. Para establecer qué es lo previsible en cada caso concreto, se requiere analizar las circunstancias particulares que rodean la actividad en desarrollo de la cual acaeció el daño y, por consiguiente, se deben verificar las previsiones normales que habrían de exigirse a quien alega la fuerza mayor"*³³.

En la misma providencia, el Consejo de Estado destacó que la imprevisibilidad implica que el agente que alega una causa extraña deba haberse visto totalmente imposibilitado de precaver en condiciones normales la ocurrencia del hecho sobre el que se funda su alegación, de lo contrario *"por más súbito y arrollador de la voluntad que parezca, no genera el caso fortuito ni la fuerza mayor"*³⁴ (Subrayado fuera del texto).

Así mismo, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha acogido la posición de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de señalar que la previsibilidad de un evento se predica respecto a los hechos: *"(...) que suceden en el curso ordinario en que se desarrolla determinada actividad (...). Para acordar lo previsible de un hecho, deben tenerse en cuenta tres criterios sustantivos, los cuales deben analizarse respecto de cada caso en concreto: a. El referente a su normalidad y frecuencia. b. El atinente a la probabilidad de su realización. c. El concerniente a su carácter excepcional y sorpresivo"*³⁵.

b) Irresistibilidad

La irresistibilidad debe entenderse como la imposibilidad de ejecutar o cumplir con las obligaciones adquiridas, debido a que el evento acaecido fue inevitable e insuperable. Dicha imposibilidad no puede mezclarse y desorientar su esencia, confundiéndose con la simple dificultad que se tenga para el cumplimiento de una obligación de cara a circunstancias eminentemente subjetivas de quien se obliga de manera voluntaria.

Al respecto, el Consejo de Estado ha manifestado:

"(...) hecho irresistible: se refiere a la imposibilidad objetiva para el sujeto de evitar las consecuencias derivadas del hecho imprevisto. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que este elemento de la fuerza mayor consiste en que haya sido absolutamente imposible evitar"

³¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 6 de julio de 2016. Radicado número 25000-23-27-000-2001-00081-01(19817). Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Como sustento de lo sostenido por el Consejo de Estado, en el mismo documento se cita la sentencia de la Sección Cuarta del 3 de junio de 2010, expediente 16564. Consejera Ponente: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

³² *Ibidem*

³³ Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 30 de septiembre de 2014. Radicado No. 11001-03-15-000-2009-00415-00. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ *Ibidem*

el hecho o suceso aludido, no obstante, los medios de defensa empleados para superarlo. También implica la imposibilidad de sobreponerse al hecho para eludir sus efectos³⁶
(Subrayado fuera de texto).

El mismo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha enfatizado en que la calificación de un evento como constitutivo de fuerza mayor depende inexorablemente de su naturaleza absolutamente extraordinaria, imprevista e irresistible para el deudor, quien se habría visto absolutamente impedido de gestionar el imprevisto en búsqueda de una alternativa que le permitiese dar cumplimiento a sus compromisos. Valga la pena traer a colación lo indicado en sentencia del 27 de agosto de 2006:

"Si conforme al conocimiento de la empresa la principal causa de interrupciones en el sistema eléctrico en el municipio de Totoró son las descargas atmosféricas (en el documento allegado por CEDELCA se observa que estas se presentan con regularidad en los meses de noviembre y diciembre de 2004), es claro que las mismas no pueden ser consideradas como eventos de fuerza mayor, pues es precisamente la imprevisibilidad e irresistibilidad del acontecimiento (no su frecuencia, regularidad y constancia) lo que le otorga ese carácter extraordinario y de eximente de responsabilidad. Bajo tal óptica, los daños ocurridos por causa de las descargas eléctricas ocurridas con ocasión de las tormentas en el municipio de Totoró son verdaderas fallas en la prestación del servicio imputables a la empresa prestadora del mismo, toda vez que tratándose de un problema casi que constante, por su regularidad o periodicidad, y que viene suscitándose con anterioridad, no se ve como no podía enfrentársele con éxito, mediante una adecuada gestión que contrarrestara o al menos redujera al mínimo sus efectos, echando mano de procedimientos modernos, idóneos y oportunos; en el proceso, la empresa demandada no acredita que haya adelantado acciones eficaces tendientes a solucionar los inconvenientes ocurridos a causa de aquellas"³⁷
(Subrayado fuera del texto).

Por su parte, aunque en la misma línea, la Corte Suprema de Justicia ha considerado que

"(...) la falta de diligencia o cuidado, la negligencia, desidia, imprudencia o inobservancia de los patrones o estándares objetivos de comportamiento exigibles según la situación, posición, profesión, actividad u oficio del sujeto, comporta un escollo insalvable para estructurar la fuerza mayor cuando, por supuesto, su incidencia causal sea determinante del evento dañoso, porque en esta hipótesis, el hecho obedece a la conducta de parte y no a un acontecer con las características estructurales de la vis mayor"³⁸.

c) Externalidad

El Consejo de Estado ha explicado que el hecho o evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser ajeno a las partes de la obligación. Es decir, la circunstancia sobre la que se funda el argumento de la existencia de una causa extraña no puede estar ligada al proceder de las partes del vínculo jurídico³⁹. Asimismo, este Alto Tribunal ha sido enfático en señalar que la participación en el hecho de quien alega la ocurrencia de una causa extraña desvirtúa, además, la existencia de la imprevisibilidad. Esta posición ha sido acogida también por la Corte Constitucional al afirmar:

"(...) la fuerza mayor y el caso fortuito requieren que el hecho sobreviniente sea externo. Por tal razón, el afectado no puede intervenir en la situación que le imposibilitó cumplir su deber u obligación, sino que debe estar fuera de la acción de quien no pudo preverlo y resistirlo. Este requisito exige por tanto que el hecho no provenga de la persona que lo presenta para eximir su responsabilidad, de forma que no haya tenido control sobre la situación, ni injerencia en la misma" (subrayado fuera de texto)⁴⁰.

Así, aparece con claridad que la jurisprudencia condiciona la configuración de un eximente de responsabilidad al carácter exógeno o ajeno de la voluntad de las partes. Ello implica a su vez que no es posible argüir la existencia de una circunstancia constitutiva de caso fortuito o fuerza

³⁶ *Ibidem*

³⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Auto del 27 de agosto de 2006, Radicado No. 19001-23-31-000-2005-00116-01. Consejero Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Planeta.

³⁸ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia del 24 de junio de 2009. Expediente 11001-3103-020-1999-01098-01. Magistrado Ponente: William Namén Vargas. En igual sentido se ha pronunciado la sala Civil y Agraria de la Corte en la sentencia del 29 de abril de 2005. Expediente No. 0829-92. Magistrado Ponente: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Así mismo, en la sentencia del 7 de diciembre de 2016, expediente SC17723-2016, Magistrado Ponente: Luis Alonso Rico Puerta.

³⁹ Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 30 de septiembre de 2014 (Rev.). Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren: "(...) hecho externo: la exigencia de este elemento le da el verdadero carácter de causa extraña a la fuerza mayor. El hecho constitutivo de fuerza mayor debe ser ajeno a la actividad dentro de la cual se ha causado el daño; dicho de otra manera, la fuerza mayor está definida como aquel hecho que no depende del actuar de ninguna de las partes que se encuentran vinculadas al hecho dañino: no debe ser imputable ni a quien lo causa ni a quien lo sufre (...)" (subrayado fuera de texto).

⁴⁰ Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-271 del 25 de mayo de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

mayor cuando quiera que su causa se funde en una acción u omisión de uno de los sujetos de la relación jurídica.

Sentado ello, se advierte que aun cuando **EMSA** hace referencia a diversos eventos que afectaron sus indicadores de calidad, no explica ni prueba cuáles fueron dichos eventos ni cómo afectaron su sistema operativo, razón por la cual no es posible para este Despacho acreditar la existencia de un eximente de responsabilidad.

De otra parte, **EMSA** se refirió a los esfuerzos que ha realizado la empresa mediante el desarrollo de planes de inversión y el despliegue de mantenimientos a sus instalaciones, entre los cuales, resaltó "(...) mantenimientos en nivel 4 con apertura de línea tanto en la subestación reforma como en la línea que va desde Puerto López hasta Puerto Gaitán, Ocoa Reforma y Granada Ocoa, [remodelación de] algunos de los circuitos entre ellos Serranía, Barcelona, Guayuriba y Rural (...) [y] consignas nacionales las cuales se sirvieron para mantenimientos preventivos y correctivos en las subestaciones"⁴¹.

No obstante, corresponde a este Despacho advertirle a **EMSA** que, en su condición de prestador del servicio de distribución local, dichas actividades resultan inherentes a la prestación del servicio a su cargo, en las condiciones de calidad y continuidad a los que hace referencia el capítulo 11 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008.

Así las cosas, se precisa que para definir los indicadores de calidad, la mencionada norma estableció ciertas interrupciones en el servicio que son excluibles del cálculo de los índices de discontinuidad. De hecho, algunas de ellas se encuentran asociadas a proyectos de expansión y al trabajo en subestaciones. Así, el numeral 11.2.1.2 de la norma en cuestión establece:

"11.2.1.2 Exclusión de Interrupciones

Para el cálculo de los Índices de Discontinuidad y demás componentes que conforman las fórmulas que se establecen más adelante, no se tendrán en cuenta las siguientes interrupciones:

(...)

g) Las suspensiones del servicio asociadas a proyectos de expansión de los que trata el numeral 4.3 de este Anexo.

h) Trabajos en Subestaciones que respondan a un Programa Anual de Reposición y/o Remodelación para Exclusiones y cuyos cortes hayan sido informados a los usuarios afectados con una anticipación no mayor a ocho días y no menor a 48 horas, mediante publicación en un medio de comunicación masivo disponible en la región o área afectada. Cuando los eventos programados afecten cargas industriales, el tiempo de notificación no podrá ser inferior a 72 horas y requerirá una comunicación formal por parte de la empresa.

El Programa Anual debe ser reportado al inicio de cada año al SUI en los formatos y condiciones que para el efecto se establezcan mediante Circular Conjunta SSPD-CREG. El Programa Anual mencionado debe especificar y/o considerar como mínimo lo siguiente:

- *El cronograma previsto*
- *Los circuitos y transformadores que se afectarán*
- *Los tiempos previstos de afectación. Las duraciones que sobrepasan estos tiempos no serán excluidas.*
- *Una subestación no podrá ser incluida en más de un Programa Anual en un período tarifario.*
- *La exclusión de estas interrupciones para el cálculo de Incentivos y Compensaciones requiere además que el inicio y finalización de su ejecución hayan sido informados en el aplicativo del SUI anteriormente mencionado.*

(...)

Para cada una de las interrupciones excluidas, los OR deberán mantener la documentación y pruebas que sirvan de soporte para la exclusión, así como de los avisos realizados para informar al usuario sobre las interrupciones que causarán los trabajos de remodelación y/o reposición de subestaciones, la cual será verificada por la auditoría de la cual trata el numeral 11.2.5.4.2.

(...)" (Subrayado fuera de texto).

⁴¹ Cfr. Folios 49 revés a 50 de la carpeta única del expediente.

Para el caso en estudio, **EMSA** atribuye algunas de sus interrupciones a proyectos de mantenimiento y remodelación de determinados activos energéticos. Sin embargo, para el análisis del **ITAD**, este Despacho tuvo en cuenta la información oficial cargada al **SUI**, donde **EMSA** debió reportar su Programa Anual de Reposición y/o Remodelación para Exclusiones, para que al momento de analizar la información allí cargada, se tuvieran como excluidas las interrupciones que el **OR** hubiese reportado debida y oportunamente.

De allí que, aunque en efecto la **SSPD** tuvo en cuenta la información previamente relacionada al momento de analizar los indicadores de la calidad de **EMSA**, en el presente caso se acreditó una falla en la prestación del servicio, que no se justifica a la luz de lo estudiado.

iii) Respecto a la calidad del servicio prestado en el año 2017

EMSA solicitó tener en cuenta la mejora en la calidad reflejada para en el año 2017 y la efectividad de su plan de mantenimientos.

Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que la presente actuación se circunscribió al cuarto trimestre de 2016, razón por la cual los comportamientos que la empresa adoptó con posterioridad no desvirtúan el reproche aquí cuestionado.

Para analizar dicho argumento, se estudiará, en primer lugar, el principio constitucional del debido proceso, así como los principios de legalidad y tipicidad⁴² propios de las actuaciones administrativas, en la medida en que tienen como fin evitar la arbitrariedad de los jueces y las autoridades administrativas, así como garantizar seguridad jurídica⁴³.

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples ocasiones respecto a ellos, en los siguientes términos:

"4.3.2. Esta Corporación ha señalado que el principio de legalidad exige: "(i) que el señalamiento de la sanción sea hecho directamente por el legislador; (ii) que éste señalamiento sea previo al momento de comisión del ilícito y también al acto que determina la imposición de la sanción; (iii) que la sanción se determine no solo previamente, sino también plenamente, es decir que sea determinada y no determinable" y tiene como finalidad proteger la libertad individual, controlar la arbitrariedad judicial, asegurar la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal y en su materialización participan, los principios de reserva de ley y de tipicidad.

(...)

4.3.2.2. Por su parte, el principio de tipicidad se concreta a través de la descripción completa, clara e inequívoca del precepto - la orden de observar un determinado comportamiento, es decir de no realizar algo o de cumplir determinada acción - y de la sanción - la consecuencia jurídica que debe seguir a la infracción del precepto - y busca que la descripción que haga el legislador sea de tal claridad que permita que sus destinatarios conozcan exactamente las conductas reprochables, evitando de esta forma que la decisión sobre la consecuencia jurídica de su infracción, pueda ser subjetiva o arbitraria"⁴⁴. (Subrayado por fuera del texto).

Así las cosas, en cumplimiento del principio de legalidad, deben satisfacerse tres postulados fundamentales que actúan como obligaciones para la administración: (i) describir de forma clara, expresa e inequívoca los elementos constitutivos de la conducta típica que se imputará; (ii) hacer las remisiones normativas precisas cuando se haya previsto un tipo en blanco; (iii) determinar con claridad los criterios para la imposición de una eventual sanción.

En congruencia con ello, la Corte Constitucional⁴⁵ ha reiterado que la aplicación del principio de tipicidad en la órbita del derecho administrativo sancionador exige la concurrencia de tres elementos particulares: (i) que la conducta sancionable esté descrita de manera específica y precisa; (ii) que exista una sanción cuyo contenido material esté definido en la ley; (iii) que exista correlación entre la conducta y la sanción.

⁴² Los principios de legalidad y tipicidad se encuentran consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política como componentes intrínsecos del núcleo del derecho al debido proceso, y han sido reiterados el artículo 3 del CPACA, el cual consagró el principio de legalidad en las actuaciones administrativas sancionatorias.

⁴³ Sala Plena de la Corte Constitucional, Expediente D-8608, Sentencia C-030 del 1 de febrero de 2012, MP: Luis Ernesto Vargas Silva.

⁴⁴ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 713 del 12 de septiembre de 2012. MP. MAURICIO GOZALEZ CUERVO.

⁴⁵ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-030 de 2012, M.P. Luis Fernando Vargas Silva.

En ese orden de ideas, es preciso advertir que aun cuando la jurisprudencia constitucional⁴⁶ ha reconocido que en el ámbito del derecho administrativo sancionatorio, los principios de legalidad y tipicidad no tienen el mismo nivel de rigidez que en la disciplina penal, tanto los comportamientos objeto de una investigación administrativa, como los criterios que determinaran la imposición de una eventual sanción deben describirse de forma clara, expresa e inequívoca, con el propósito de preservar las disposiciones de debido proceso que se sustentan en el artículo 29 de la Constitución Política.

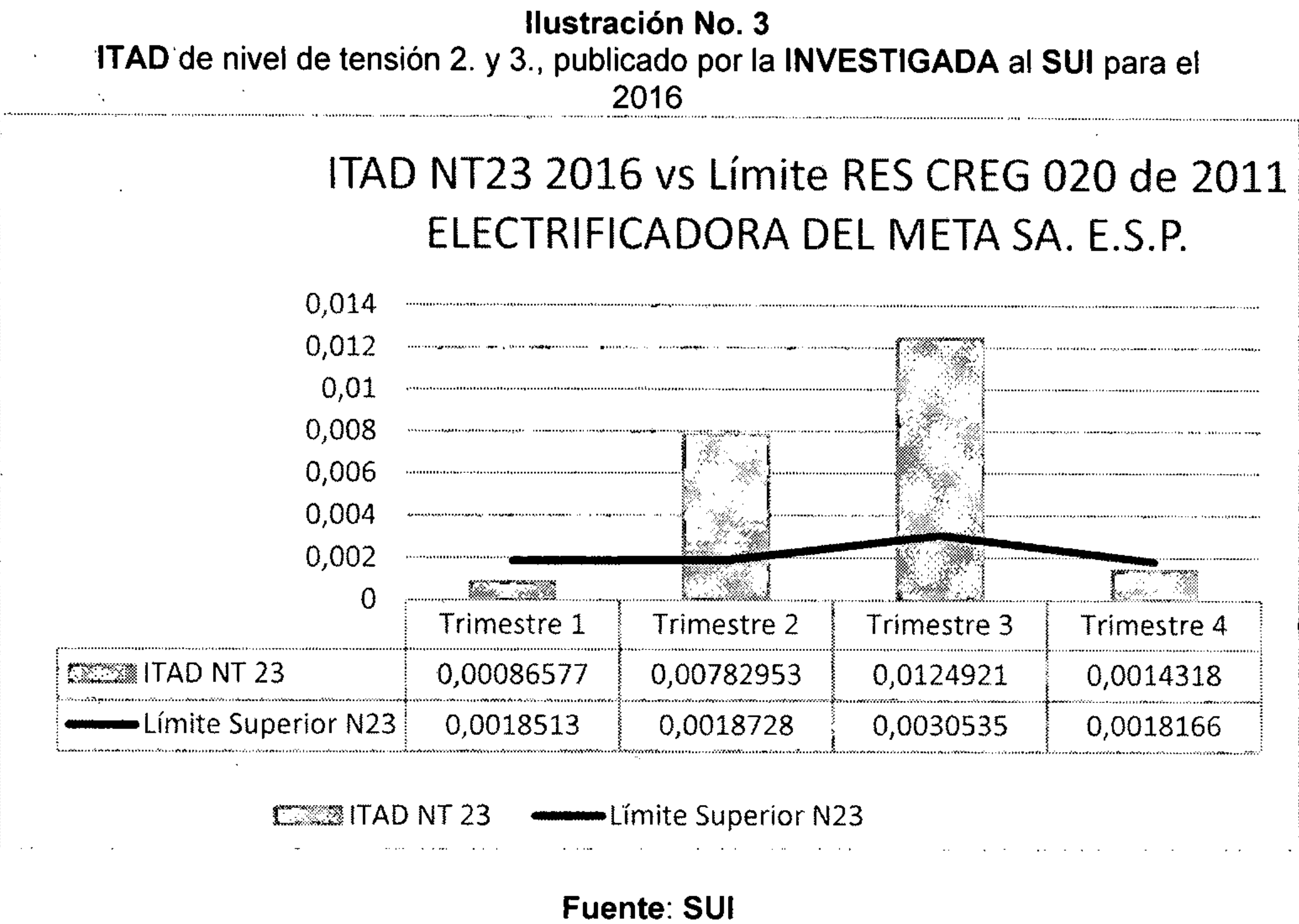
En el caso concreto, observa este Despacho que la imputación jurídica se circunscribió al cuarto trimestre del año 2016. De allí que, lo alegado por **EMSA** respecto a la mejora de sus índices de calidad durante el año 2017, no desvirtúa el incumplimiento objeto de la presente actuación, al versar sobre hechos distintos. En consecuencia, tomar en cuenta lo alegado por la empresa, implicaría un desconocimiento a los principios de tipicidad, debido proceso y legalidad.

Así las cosas, estos argumentos serán rechazados por este Despacho.

iv) Situación particular de los niveles de tensión 2 y 3

En su línea argumentativa **EMSA** señaló que “[e]n el Nivel 2-3 Agrupado el índice Trimestral Agrupado de la Discontinuidad (ITAD) no supera la Banda de Indiferencia establecida para EMSA en ningún trimestre”⁴⁷.

En virtud de tal argumento, el Despacho procedió a verificar la información que en la actualidad reposa en el **SUI**, evidenciando que para el cuarto trimestre de 2016 los niveles de tensión 2 y 3 no superaron el promedio histórico ni la Banda de Indiferencia adoptada mediante la Resolución CREG 020 de 2011, como se muestra a continuación:



En vista de lo anterior, no se evidenció incumplimiento por parte de **EMSA** respecto del cuarto trimestre del año 2016 en los niveles de tensión 2 y 3, razón por la cual este Despacho se referirá únicamente al análisis del nivel de tensión 1, para efectos de endilgar incumplimiento a **EMSA**.

3.4. ANÁLISIS DEL CARGO SEGUNDO

Procede el Despacho a analizar el cargo segundo endilgado a **EMSA** por presuntamente haber incurrido en falla en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, al tener tres mil trescientos ochenta y tres (3.383) usuarios “Peor servidos”, cuya compensación

⁴⁶ Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-475 de 2004, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

⁴⁷ Cfr. Folio 50 de la carpeta única del expediente.

estimada superó el costo del servicio de distribución para el periodo comprendido entre enero y abril de 2017.

3.4.1.Circunstancias de hecho relacionadas con el cargo segundo

- i) Mediante el oficio SSPD No. 20172200416661 del 9 de mayo de 2017⁴⁸, la **DTGE** requirió a la **INVESTIGADA** para que allegara la información “(...) atinente a los usuarios que recibieron compensaciones (peor servidos), en el periodo comprendido entre julio de 2015 hasta abril del 2017”⁴⁹.
- ii) A través de la comunicación No. 20175290416502 del 5 de junio de 2018⁵⁰, **EMSA** allegó un archivo mediante el cual presentó la información requerida en el numeral anterior.
- iii) Con base en los insumos presentados por la **INVESTIGADA**, la **DTGE** procedió a realizar el cálculo de las compensaciones - *debidas y estimadas* -, para el periodo comprendido entre julio de 2015 hasta abril de 2017, conforme lo dispuesto en el numeral 11.2.4.3 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008.

Tal análisis arrojó la existencia de **3.383**⁵¹ eventos en los cuales **EMSA** presuntamente habría incurrido en una falla en la prestación del servicio, por tener usuarios peor servidos cuya compensación estimada habría superado el costo de su servicio de distribución.

3.4.2. Análisis de los incumplimientos reprochados en el cargo segundo

De acuerdo los hechos que dieron lugar a la presente investigación administrativa, y teniendo en cuenta el marco normativo previamente expuesto, este Despacho observa que **EMSA** incumplió las obligaciones contenidas en los numerales 11.2.4.1 y 11.2.4.3 del Capítulo 11 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008 y, en consecuencia, los artículos 136 de la Ley 142 de 1994 y 6 de la Ley 143 de 1994.

Para llegar a dicha conclusión, se analizó la información remitida por la **INVESTIGADA** mediante comunicación No. 20175290416502 del 5 de junio de 2018⁵², en la cual reportó a la **SSPD** el listado de los usuarios Peor Servidos de su sistema operativo.

Así, una vez aplicada la metodología de calidad dispuesta por la Resolución CREG 097 de 2008, este Despacho evidenció una falla en la prestación del servicio de energía a cargo de la **INVESTIGADA**, materializada en tres mil trescientos ochenta y tres (3.383) usuarios que atiende, tal como se expone a continuación:

Tabla No. 1
Relación de los usuarios peor servidos frente a los cuales se configuró una falla en la prestación del servicio en el sistema operativo de **EMSA**

PERIODO	USUARIOS PEOR SERVIDOS
Enero	1498
Febrero	902
Marzo	582
Abril	401
Total eventos	3383

Fuente: Pliego de cargos SSPD No. 20192400638121 del 31 de julio de 2019.⁵³

Adicionalmente, en su escrito de descargos, **EMSA** reconoce la materialización de una falla en la prestación del servicio, así: “La afirmación por parte de la SSPD es correcta dado que en el mes de abril de 2017 se estableció plan de acción para validar que solo se compensara hasta el costo de la D según lo descrito en el numeral 11.2.4.3 de la Resolución CREG 097-2008”⁵⁴.

En virtud de lo anterior, lo cierto es que, entre los meses de enero a abril de 2017, la **INVESTIGADA** presentó un promedio de 845,75 usuarios *Peor Servidos* por mes, cuya compensación superó el costo del servicio de distribución facturado en el respectivo mes, los cuales sumados representan 3.383 eventos.

⁴⁸ Cfr. Folios 9 a 10 de la carpeta única del expediente.
⁴⁹ Cfr. Folio 9 de la carpeta única del expediente.
⁵⁰ Cfr. Folio 11 de la carpeta única del expediente.
⁵¹ Para el periodo comprendido entre enero y abril de 2017.
⁵² Cfr. Folio 11 de la carpeta única del expediente.
⁵³ Cfr. Folio 22 revés de la carpeta única del expediente.
⁵⁴ Cfr. Folio 50 revés de la carpeta única del expediente.

Así las cosas, resulta claro para el Despacho que **EMSA** infringió lo dispuesto en los numerales 11.2.4.1 y 11.2.4.3 de la Resolución CREG 097 de 2008; configurándose una falla en la prestación del servicio de energía en los términos del artículo 136 de la Ley 142 de 1994.

4. SANCIÓN A IMPONER

Conforme lo anteriormente expuesto, el Despacho encontró demostrado el incumplimiento por parte de **EMSA** de las obligaciones regulatorias y legales previstas en los dos (2) cargos formulados en su contra.

Por tanto, dada la naturaleza de las conductas de la **INVESTIGADA**, el Despacho evidencia que las infracciones cometidas revisten la gravedad suficiente para ejercer sus facultades de control e imponer sanción administrativa en la modalidad de multa, según se expone a continuación:

4.1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LA DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN

Las conductas objeto de sanción en la presente actuación administrativa, se encuentran sujetas a las sanciones previstas en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994:

"Artículo 81. Sanciones. La Superintendencia de servicios públicos domiciliarios podrá imponer las siguientes sanciones a quienes violen las normas a las que deben estar sujetas, según la naturaleza y la gravedad de la falta:

81.1. Amonestación.

81.2. Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios mínimos mensuales. El monto de la multa se graduará atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público, y al factor de reincidencia. Si la infracción se cometió durante varios años, el monto máximo que arriba se indica se podrá multiplicar por el número de año. Si el infractor no proporciona información suficiente para determinar el monto, dentro de los treinta días siguientes al requerimiento que se le formule, se le aplicaran las otras sanciones que aquí se prevén. Las multas ingresarán al patrimonio de la Nación, para la atención de programas de inversión social en materia de servicios públicos, salvo en el caso al que se refiere el numeral 79.11. Las empresas a las que se multe podrán repetir contra quienes hubieran realizado los actos u omisiones que dieron lugar a la sanción".

Con arreglo al texto precitado, las sanciones en la modalidad de multa que imponga la **SSPD** deben graduarse conforme los criterios de: (i) impacto de la infracción sobre la prestación del servicio público; (ii) prolongación de la infracción en el tiempo; y (iii) reincidencia en la comisión de la infracción.

Así, para la graduación y dosificación de la sanción a imponer respecto a los cargos endilgados a **EMSA** dentro de la presente actuación administrativa, se desarrollarán los citados criterios.

4.2. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN

En el presente acápite, el Despacho procederá a realizar el análisis de los criterios para la graduación y dosificación de la sanción frente a cada uno de los cargos, en los términos del numeral 2° del artículo 81 de la Ley 142 de 1994.

4.2.1. Graduación de la sanción respecto del primer cargo

i) Aplicación de los criterios de dosificación

• Impacto de la infracción sobre el servicio público

El primer criterio de graduación y cálculo del valor de referencia de la sanción establecido por el artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994, es el impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público. En este sentido, puede afirmarse que **EMSA** al haber aumentado su **ITAD** con respecto al promedio histórico y por encima de la banda de indiferencia, desmejoró la calidad y afectó la continuidad del servicio prestado, de acuerdo con los índices de referencia de los años 2006 y 2007 definidos por la **CREG**.

Debe recordarse que el **ITAD** representa el Índice de Discontinuidad que relaciona la calidad promedio de Energía No suministrada (**ENS**) por cada unidad de Energía Suministrada (**ES**) por un **OR** durante el trimestre de evaluación, por lo que la conducta endilgada se traduce en la prestación de un servicio que no cumple con los requisitos de continuidad y calidad exigibles.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la **INVESTIGADA** incumplió su obligación principal de prestar continuamente el servicio de energía eléctrica, forzoso es concluir que incurrió en una falta grave; pues incluso en los términos de la jurisprudencia del Consejo de Estado:

“Según se advierte claramente, la entidad demandada si justifico en las resoluciones demandadas la naturaleza de la sanción impuesta, al señalar que la conducta investigada constituía una falta grave, que daba lugar a una multa. Esa calificación en efecto es pertinente en criterio de la Sala, pues resulta de la mayor gravedad que una empresa prestadora de servicios público domiciliarios no garantice una prestación continua, ininterrumpida y eficiente del servicio y además de ello cobre a sus usuarios cargos por servicios no prestados. Igualmente, la Superintendencia justificó el quantum de la multa al advertir que el valor de ella obedecía al impacto de la infracción sobre la buena marca del servicio, impacto que por lo dicho es evidente en este caso (...)”⁵⁵ (Subrayado fuera de texto).

Finalmente, debe precisarse que en el presente caso, la **SSPD** verificó⁵⁶ que para el año 2016 **EMSA** contaba con un total de usuarios 297.436, pertenecientes al nivel de tensión 1, los cuales se vieron afectados por el incumplimiento de la **INVESTIGADA**.

- **Prolongación de la infracción en el tiempo**

De acuerdo con las pruebas recaudadas sobre la duración de la infracción reprochada a la **INVESTIGADA** en el presente cargo, se presentó una falla en la prestación del servicio durante el cuarto trimestre de 2016.

- **Reincidencia**

A la fecha de expedición del presente acto administrativo, no se encontró que la **INVESTIGADA** haya sido sancionada previamente por la misma conducta descrita en el cargo primero, razón por la cual no se agravará la sanción con fundamento en este criterio.

ii) Dosificación de la sanción para el primer cargo

Para la dosificación de la sanción a imponer como consecuencia del primer cargo, el Despacho tendrá en cuenta los siguientes aspectos relevantes:

- El incumplimiento por parte de **EMSA**, respecto el artículo 136 de la Ley 142 de 1994, el artículo 6 de la Ley 143 de 1994 y el numeral 11.2.4.1 del capítulo 11 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008, constituye una falla en la prestación del servicio, al configurarse un incumplimiento en la prestación continua y de calidad del servicio de energía eléctrica.
- La cantidad de usuarios afectados por la falla en la prestación del servicio fue de 297.436.
- La infracción se presentó durante el cuarto trimestre de 2016.

De esta manera, dicha multa se dosifica en la suma de **SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MTE (\$745.304.400)**, equivalentes **NOVECIENTOS (900) SMLMV**, sanción que se dosifica teniendo en cuenta el límite previsto para la sanción de multa en el artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994, aplicable para el presente asunto, y la proporción en función de cada cargo analizado en el presente acto administrativo.

⁵⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera, Sentencia del 18 de septiembre de 2014. Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala, Radicación No. 25000-23-24-000-2008-00282-01.

⁵⁶ Datos tomados del **SUI** de la herramienta de análisis O3, con corte a diciembre de 2016.

4.2.2. Graduación de la sanción para el cargo segundo

i) Aplicación de los criterios de graduación

- **Impacto de la infracción sobre el servicio público**

En relación con el impacto a la buena marcha del servicio, el Despacho evidenció que se presentaron graves afectaciones a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica como consecuencia de la infracción de **EMSA**, razón que permite calificar la falta como grave.

En efecto, según ha sido expuesto en acápites anteriores, la prestación del servicio público de energía eléctrica con la calidad y continuidad debida, es una obligación principal para los prestadores de tal servicio y un derecho para los usuarios que reciben el mismo; razón por la cual el incumplimiento a dichas obligaciones deviene en una falla en su prestación.

Es así que, con la expedición de la Resolución CREG 097 de 2008, se dispusieron las condiciones técnicas para garantizar la prestación del servicio de distribución de electricidad en el **SDL** en términos de calidad y continuidad; para lo cual se regularon las condiciones a efectos de calcular los indicadores y criterios para medir la calidad en el servicio y dar aplicación al esquema de incentivos y compensaciones.

Por su parte, el numeral 11.2.4.3 de la Resolución CREG 097 de 2008 señaló que *“En ningún caso, el valor mensual a compensar a cada usuario (...), podrá ser superior al costo del servicio de distribución facturado al usuario en el respectivo mes”*; por cuanto ello supone un incumplimiento en la prestación continua del servicio de distribución, que al estar asociados al **SDL**, genera un impacto al usuario final, quien ostenta el derecho de recibir un servicio con la calidad y continuidad debidas.

En el presente asunto, se constató que **EMSA** presentó tres mil trescientos ochenta y tres (3.383) casos en los cuales la compensación correspondiente a cada usuario catalogado como peor servido, superó el costo del servicio de distribución facturado al usuario en el respectivo mes, durante los cuatro primeros meses del año 2017, contrariándose así lo dispuesto en el numeral 11.2.4.3 de la Resolución CREG 097 de 2008.

- **Prolongación de la infracción en el tiempo**

De acuerdo con las pruebas recaudadas sobre la duración de la infracción reprochada a la **INVESTIGADA** en el presente cargo, se representó una falla en la prestación del servicio que se prolongó desde enero hasta abril de 2017, es decir, durante cuatro meses.

- **Reincidencia**

A la fecha de expedición del presente acto administrativo, no se encontró que la **INVESTIGADA** haya sido sancionada previamente por la misma conducta descrita en el cargo segundo, razón por la cual no se agravará la sanción con fundamento en este criterio.

ii) Dosificación de la sanción para el cargo segundo

Para la dosificación de la sanción a imponer como consecuencia del cargo segundo, el Despacho tendrá en cuenta los siguientes aspectos relevantes:

- El incumplimiento de lo señalado en el numeral 11.2.4.3 de la Resolución CREG 097 de 2008 y el artículo 136 de la Ley 142 de 1994, impactó la buena marcha del servicio de distribución al configurarse un incumplimiento en la prestación continua del servicio de distribución de energía eléctrica en el **SDL**.
- Los tres mil trescientos ochenta y tres (3.383) eventos presentados, donde la compensación correspondiente a cada usuario catalogado como Peor Servido superó el costo del servicio de distribución facturado en el respectivo mes, corresponden en promedio a 845,75 usuarios.

- La duración de la infracción se presentó durante los cuatro primeros meses del año 2017.

De esta manera, dicha multa se dosifica en la suma de **TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MTE (\$331.246.400)**., equivalentes a **CUATROCIENTOS (400) SMLMV**, sanción que se dosifica teniendo en cuenta el actual límite previsto para la sanción de multa en el artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994.

4.3. PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD DE LA SANCIÓN

La sanción que se imponga debe atender a los principios de proporcionalidad y razonabilidad de la facultad sancionatoria del Estado. De esta manera, respecto del principio de proporcionalidad en materia sancionatoria, la Corte Constitucional ha afirmado que:

“Éste exige que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a la misma resulten adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan la función pública. Respecto de la sanción administrativa, la proporcionalidad implica también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad”⁵⁷ (Subrayado fuera del texto).

De igual forma, en cuanto al principio de razonabilidad la Corte Constitucional ha señalado:

“El contenido mismo del concepto de “razonabilidad” ha sido explorado por la Corte que, en sentencia, dijo “hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”⁵⁸ (Subrayado fuera del texto).

Encuentra entonces este Despacho encuentra que la sanción en la modalidad de multa resulta proporcional, además de ajustarse a la gravedad de las infracciones y sin desconocer la situación financiera del prestador.

Adicionalmente la sanción de multa resulta razonable y necesaria para disuadir al prestador de la comisión de las endilgadas infracciones, de forma tal que adecue los procedimientos para el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que tiene a cargo.

4.4. VALOR FINAL DE LA MULTA

Conforme a la motivación expuesta a lo largo del presente acto administrativo, este Despacho impondrá sanción de multa a **EMSA**, por los siguientes valores:

CARGO	VALOR	SMLMV
PRIMER CARGO	SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MTE (\$745.304.400)	NOVECIENTOS (900)
SEGUNDO CARGO	TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MTE (\$331.246.400)	CUATROCIENTOS (400)
TOTAL	MIL SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MTE (\$1.076.550.800)	MIL TRESCIENTOS (1300)

En mérito de lo expuesto, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR en la modalidad de **MULTA** por valor de **MIL SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MTE (\$1.076.550.800)** equivalentes a **1300 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES** a la **ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.**, identificada con el NIT

⁵⁷ Corte Constitucional, Sentencia C-125 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas.
⁵⁸ Corte Constitucional, Sentencia C-1026 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

892.002.210-6, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a la **ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.**, identificada con el NIT 892.002.210-6, a través de su representante legal o quien haga sus veces, en el correo electrónico notificacionsspd@emsa-esp.com.co⁵⁹, con la entrega de una copia de la misma, y con la advertencia que contra ésta procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

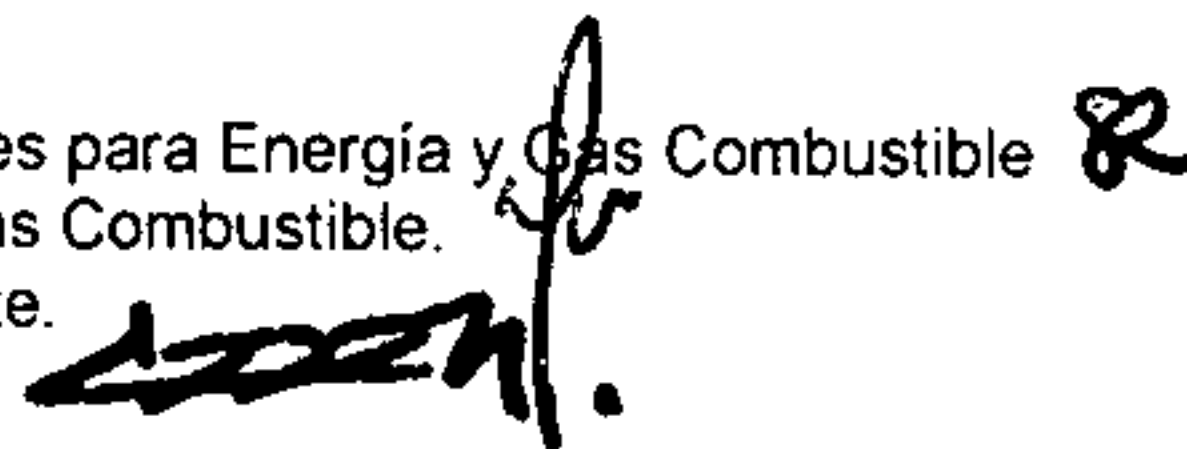
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



NATASHA AVENDAÑO GARCÍA

Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios

Proyectó: Lina Margarita Rojas Camargo - Abogada de la Dirección de Investigaciones para Energía y Gas Combustible
Revisó: Madia Elena Ortega Otero- Directora de Investigaciones para Energía y Gas Combustible.
Aprobó: Gustavo A. Peralta Figueredo – Asesor del Despacho de la Superintendente.



⁵⁹ Cfr. Folio 62 de la carpeta única del expediente.